



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, así como en la Disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, cúmpleme informarle lo siguiente.

I

Tal y como indica el artículo 1 del proyecto sometido a informe, el mismo tiene por objeto “crear y regular la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales, previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y el régimen de anotación, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél”.

A tal efecto, cabe recordar que la disposición adicional decimoséptima de la mencionada Ley establece que “el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de delincuentes sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia, así como el régimen de inscripción y cancelación de sus asientos y el acceso a la información contenida en aquél, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formará, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. La Administración General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información en este ámbito”.

Por otra parte indica la Exposición de motivos del Proyecto que el mismo viene a plasmar “el compromiso adquirido por España al ratificar el Convenio de Lanzarote relativo a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual, de 25 de octubre de 2007 de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor, así como los derivados de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011,



relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo”.

## II

Entrando ya en el estudio del contenido del Proyecto, su artículo 2.1 señala que “El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por delitos contra libertad e indemnidad sexuales, en los que se incluyan la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea”, estableciendo en artículo 2.2 que será “finalidad exclusiva” del Registro “contribuir al objetivo de proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quien sea el autor, mediante el establecimiento de un mecanismo que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones y actividades que impliquen el contacto habitual con menores carecen o no de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual”.

En lo que respecta a su contenido, el artículo 4 indica que habrá de constar “en todo caso” en el Registro los datos referidos al identificador del perfil genético del condenado “cuando así sea acordado por el órgano judicial”. Asimismo, el Registro incluirá el número ordinal informático policial y número de atestado, la referencia a la condición de menor de edad de la víctima, en su caso, el delito cometido y la fecha de comisión del delito.

El Proyecto establece en su artículo 5 un régimen de comunicación de la información del registro con el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Asimismo, se establece en el artículo 7.4 el acceso a los datos por los encargados de la Base de Datos nacional de ADN del Ministerio del Interior, regulada por la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre.

El artículo 7.1 prevé el acceso a los datos del registro por parte de “los órganos judiciales del orden penal, el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales del orden civil que conozcan de procedimientos de familia, a los efectos de su utilización en los procesos o actuaciones en los que intervengan” (párrafo primero), así como de la policía judicial “para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas anotadas en este Registro Central” (párrafo segundo). Igualmente, el párrafo tercero del artículo 7.1 se refiere al acceso a los datos del registro por parte de las Administraciones públicas competentes en materia



de protección a la infancia “para recabar los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social, aún sin consentimiento de los interesados”. Según el artículo 7.1 estos accesos podrán referirse a “toda la información contenida en el registro, aunque se refiera a menores de edad”.

El acceso a los datos del Registro también aparece recogido en el régimen de certificaciones al que se refiere el artículo 9 del Proyecto, en el que parecen distinguirse dos supuestos:

- Los accesos que podrán llevarse a cabo por parte de las Administraciones Públicas ante las que se tramite un procedimiento en el que sea preceptivo este certificado por tratarse de un procedimiento para acceder o ejercer profesiones o actividades que impliquen un contacto habitual con menores, con consentimiento del interesado, salvo que una norma con rango de Ley lo exceptúe. En este caso, el registro informará a la autoridad competente a través de la plataforma de intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- La emisión de certificaciones a petición del titular interesado de los datos relativos a su persona, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de Ley se hallen a disposición exclusiva de los Jueces y Tribunales.

Por último, en cuanto a la cancelación de la información, si bien el artículo 2.4 se refiere al sometimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, el artículo 9.2 ya mencionado se refiere a la certificación del contenido del Registro a instancia del propio interesado (o su representante si fuera menor de edad) y el artículo 8 establece el régimen específico de cancelación de los datos del registro, que difiere del previsto en las normas de protección de datos de carácter personal.

### III

Una vez descrito el contenido del Proyecto sometido a informe, debe traerse a colación, por cuanto, como se verá, resulta relevante a los efectos del análisis que habrá de llevarse a cabo en el presente informe, lo señalado por esta Agencia en el informe de 25 de julio de 2014, emitido en relación con el entonces Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia.

El citado informe analizaba la única previsión que incorporaba el Anteproyecto sometido a informe de la Agencia, que era la derivada de la reforma del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. Dicho



precepto, contenido igualmente en el apartado ocho del artículo primero del texto finalmente aprobado, establece que “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.

El texto que fue informado por la Agencia no incluía una disposición específica de creación del Registro, sino que limitaba su contenido a la norma citada. No obstante, la Exposición de Motivos del texto informado, reiterada por su Memoria de impacto normativo señalaban que “se exigirá, como requisito a los profesionales que en el ejercicio de su cometido tengan contacto habitual con niños, que no hayan sido condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, dando con ello cumplimiento a una de las obligaciones adquiridas por nuestro país al ratificar el Convenio del Consejo de Europa relativo a la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso Sexual de 25 de octubre de 2007 (Convenio de Lanzarote)”, que fue ratificado por España mediante Instrumento de 22 de julio de 2010.

El informe emitido por esta Agencia ponía de manifiesto las diferencias existentes en la legitimación establecida por el Anteproyecto y el citado Convenio del Consejo de Europa. Así, se indicaba que

*“El artículo 37.1 del Convenio establece que “a efectos de la prevención y enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio, cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para recoger y almacenar, de conformidad con las disposiciones aplicables sobre protección de datos de carácter personal y otras normas y garantías apropiadas que el derecho interno prevea, los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio”.*

*Añade el artículo 37.3 que “cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que la información a que hace referencia el apartado 1 pueda transmitirse a la autoridad competente de otra Parte, de conformidad con las condiciones establecidas en su derecho interno y los instrumentos internacionales pertinentes”.*

*Estas normas delimitan claramente la finalidad que justificará la creación del registro en el que se recogerían los mencionados datos, y que no serían otras que las de colaborar en “la prevención y enjuiciamiento de*



*delitos tipificados con arreglo al presente Convenio”, garantizando así el acceso por cada una de las partes a la información identificativa y genética de los condenados con esta finalidad.*

*Como puede comprobarse, la citada finalidad no parece coincidir con la derivada de lo dispuesto en el nuevo artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 cuya redacción se incorpora al Anteproyecto sometido a informe, toda vez que en este texto la finalidad del registro, a cuya creación ni siquiera alude el Anteproyecto, sería el acceso al mismo por parte de quienes contratasen a los que en el ejercicio de su actividad mantuvieran contacto con niños. Esta circunstancia se ve ratificada por el hecho de que el Convenio no sólo se refiere a datos meramente identificativos de los condenados, sino también a su información genética, que lógicamente resultaría a todas luces excesiva si su finalidad fuera el acceso a la información por parte de quienes quisieran contratar al condenado por la comisión de estos delitos, mientras que el tratamiento de este dato, sin perjuicio de lo que posteriormente se indicará, podría resultar proporcional si la finalidad del fichero es de investigación criminal.*

*De este modo, el citado Convenio Europeo no puede ser considerado a juicio de esta Agencia, frente a lo indicado en el texto sometido a informe, como base legal suficiente para establecer la previsión que se propone en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.”*

Al no poder considerarse, desde el punto de vista de esta Agencia, el Convenio como fundamentador de la creación del Registro en los términos que establecía el Anteproyecto, por cuanto la finalidad de evitar que los condenados mantengan contacto con menores difería de la establecida en el citado Convenio, centrado en la cooperación policial y judicial, el apartado IX del informe ponía de manifiesto la necesidad de proceder a la adopción de una norma que regulase los aspectos básicos del fichero. Así, se indicaba lo siguiente:

*“Ello conduce a la necesidad de analizar, en primer lugar, cuál debería ser el cauce que habría de seguirse para trasladar al derecho español lo establecido en el mencionado Convenio y, en segundo lugar, si la redacción propuesta del artículo 13.5 podría tener cabida dentro de las previsiones que garantizan el derecho fundamental a la protección de datos.*

*En todo caso, es preciso poner de manifiesto que sería siempre necesario el establecimiento de un régimen específico relacionado con el tratamiento y la cesión de los datos de carácter personal, tanto en el marco de los fines previstos en el Convenio del Consejo de Europa como en el de los que parece pretender el Proyecto ahora informado. No*



*debe olvidarse que en todo caso se procedería al tratamiento de datos relacionados con la comisión de infracciones penales, que están sujetos al régimen de especial protección previsto en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 15/1999, que limita los supuestos en que ese tratamiento puede tener lugar. Además, el Convenio se refiere al tratamiento de datos genéticos, que están sujetos a las previsiones de la Ley Orgánica para los datos especialmente protegidos relacionados con la salud, por cuanto aparecen expresamente referenciados en la definición que de estos datos da el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica.*

*Dicho lo anterior, y haciendo en primer lugar referencia al modo en que podría atenderse en el derecho español a lo establecido en el Convenio de 25 de octubre de 2007, es preciso recordar que su artículo 37.1 ordena a las partes adoptar las correspondientes medidas legislativas “de conformidad con las disposiciones aplicables sobre protección de datos de carácter personal y otras normas y garantías apropiadas que el derecho interno prevea”. De este modo, la creación de estos ficheros o registros debería en todo caso respetar los principios de la Ley Orgánica 15/1999, pero también los establecidos en la legislación procesal penal así como los que determinan los períodos de vigencia de los antecedentes penales.*

*Dicho esto, y sin por ello prejuzgar la opinión que pudiera emitir esta Agencia en caso de adoptarse las citadas medidas legislativas, entre las que ya se ha dicho que no puede considerarse apropiada la propuesta en el texto ahora informado, debe tenerse en cuenta el régimen de garantías establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la realización de análisis genéticos.*

*Además, no debe olvidarse que la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, establece en su segundo inciso que “la toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. De este modo, parece necesaria la previa decisión judicial para el tratamiento del perfil genético del condenado o el establecimiento de una previsión legal clara al efecto.*

*Igualmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 9 de la ya citada Ley Orgánica dispone que la conservación de los identificadores obtenidos a partir del ADN en la base de datos objeto de esta Ley no superará “el tiempo señalado en la Ley para la prescripción del delito” ni “el tiempo señalado en la Ley para la cancelación de antecedentes penales, si se hubiese dictado sentencia condenatoria firme, o absolutoria por la*



*conurrencia de causas eximentes por falta de imputabilidad o culpabilidad, salvo resolución judicial en contrario”.*

*En todo caso, sería en consecuencia necesario que se estableciese un régimen legal específico para la creación de los ficheros o registros policiales a los que se refiere el artículo 37 del Convenio, previendo las adecuadas salvaguardas para la recogida de los datos, su conservación, especificando claramente los plazos en que la misma podrá tener lugar, y su posible cesión, que según el Convenio sólo podría producirse en el ámbito de la prevención y persecución de los delitos.”*

#### IV

Por otra parte, y en cuanto a la normativa que pudiera fundamentar la existencia del Registro, además de la propia previsión legal expresa contenida en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 26/2015, así como del artículo 37 del Convenio del Consejo de Europa, al que se ha hecho referencia en el apartado anterior debe recordarse lo previsto en la Directiva 2011/92/UE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. Dicha norma, a diferencia del Convenio del Consejo de Europa, sí establece un régimen en cuya virtud será preciso para el desempeño de profesiones o actividades que impliquen el contacto con menores el no haber sido condenado por los delitos a los que se refiere el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996 en la redacción resultante de la reforma a la que nos venimos refiriendo.

En efecto, el considerando 40 de la citada Directiva señala que “cuando la peligrosidad o los posibles riesgos de reincidencia en las infracciones así lo aconsejen, los delincuentes condenados deben ser inhabilitados, con carácter temporal o permanente, en caso necesario, para el ejercicio, al menos con carácter profesional, de actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores. Los empresarios tienen derecho a ser informados, cuando contraten personal para un puesto que implique tales contactos directos y regulares con menores, de las condenas por infracciones sexuales contra menores que consten en los antecedentes penales, o de las inhabilitaciones vigentes. A efectos de la presente Directiva, la noción de empresario también debe abarcar a las personas que estén al frente de una organización dedicada a labores de voluntariado que guarden relación con la vigilancia o el cuidado de menores y que impliquen contactos directos y regulares con ellos. El modo de facilitar esa información, por ejemplo, por medio de la persona en cuestión, así como su contenido exacto, el sentido de las actividades de voluntariado organizadas y los contactos directos y regulares con los menores deben establecerse conforme a la legislación nacional”.



Además, tras indicar que la Directiva no impone la modificación del sistema de certificación de antecedentes penales existente en los distintos Estados Miembros, añade en su considerando 43 que “los Estados miembros podrán considerar la adopción de medidas administrativas adicionales en relación con los delincuentes, tales como establecer la inscripción de personas condenadas por las infracciones contempladas en la presente Directiva en registros de delincuentes sexuales”, recalcando expresamente que “el acceso a estos registros debe estar sujeto a limitaciones con arreglo a los principios constitucionales nacionales y las normas aplicables en materia de protección de datos, por ejemplo permitiendo el acceso solamente a las autoridades judiciales o a los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

Todo ello se plasma en el artículo 10 de la Directiva, que establece:

*“1. A fin de evitar el riesgo de reincidencia en los delitos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una persona física que haya sido condenada por una infracción contemplada en los artículos 3 a 7 pueda ser inhabilitada, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio de actividades, al menos profesionales, que impliquen contactos directos y regulares con menores.*

*2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los empresarios, al contratar a una persona para realizar actividades profesionales o actividades de voluntariado organizadas que impliquen contactos directos y regulares con menores, tengan derecho a solicitar información, de conformidad con el Derecho nacional, por cualquier medio apropiado, como el acceso previa petición o a través del interesado, de la existencia de condenas por infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 que consten en el registro de antecedentes penales, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales.*

*3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, con vistas a la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la información relativa a la existencia de condenas penales por cualquiera de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales, sea transmitida con arreglo a los procedimientos establecidos en la Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros ( 2 ), cuando se*





*solicite la información de conformidad con el artículo 6 de dicha Decisión marco con el consentimiento de la persona interesada.”*

## V

Las consideraciones que se han efectuado hasta el presente momento resultan especialmente relevantes para analizar el contenido del Proyecto sometido al parecer de esta Agencia y, particularmente el modo en que se concilian en el mismo los principios de finalidad y proporcionalidad, consagrados en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

En este sentido, como se ha descrito en el apartado II del presente informe, el artículo 2.2 del Proyecto sometido a informe señala de forma completamente inequívoca que la finalidad del Registro es única y exclusivamente “contribuir al objetivo de proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor, mediante el establecimiento de un mecanismo que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones y actividades que impliquen el contacto habitual con menores carecen o no de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. De este modo, siguiendo la literalidad del precepto reproducido, el Registro únicamente se constituiría para la emisión de las certificaciones establecidas en el artículo 9, derivado a su vez de la exigencia actualmente prevista en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y en los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Directiva 2011/92/UE.

Si la finalidad del Registro fuese única y exclusivamente, tal y como se indica en el Proyecto coadyuvar al conocimiento por las Administraciones Públicas o por los empresarios, según en qué caso nos encontremos, de la existencia o inexistencia de condenas firmes por los delitos que se mencionan, a fin de garantizar que los condenados no puedan ejercer actividades o profesiones que impliquen un contacto habitual con menores, sería preciso que el citado registro cumpliera el principio de proporcionalidad que acaba de mencionarse; es decir, que sólo incorporase los datos “adecuados, pertinentes y no excesivos” para que fuera posible el conocimiento por los empleadores o las Administraciones Públicas de la condición del interesado.

Sin embargo, como también se describía en el apartado II, el artículo 4 del Proyecto prevé la inclusión en el registro no sólo de los datos relacionados con el delito y su fecha de comisión, sino que además incluye el perfil genético del afectado, el número ordinal informático policial y número de atestado y la



condición de menor de la víctima, siendo así que dichos datos en modo alguno resultan necesarios para la emisión de la certificación.

Al propio tiempo, el Registro creado por el Proyecto se integra en el Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia, cuyo objetivo fundamental, según el artículo 2.1 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, “es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas con competencias plenas en materia de seguridad pública, y de otros órganos administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el presente Real Decreto”.

Asimismo, si la finalidad exclusiva del Registro fuera la mencionada por el artículo 2.2 carecerían de fundamento, en el marco de dicha finalidad las distintas cesiones e interconexiones establecidas en los artículos 5 y 7 del Proyecto objeto de informe.

La cuestión planteada puede resolverse si se tiene en consideración lo previsto en la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015 así como lo señalado por esta Agencia en el informe emitido en relación con este texto legal. En efecto, es la citada disposición final, contenida en una norma con rango de Ley, la que integra el registro en el Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia y determina los datos que deberán inscribirse en el mismo. Igualmente esta disposición impone a la Administración General del Estado el deber de colaboración con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información en este ámbito.

De este modo, y siguiendo la sistemática que ya se señaló en el informe de esta Agencia, el Registro no sólo se constituye con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, sino que cumple igualmente una finalidad de apoyo a los órganos jurisdiccionales, del Ministerio Fiscal y policiales en la prevención y persecución de los delitos que se mencionan en el texto sometido a informe. De este modo, su finalidad excede de la mencionada en el Proyecto, sino que se vincula con la contenida en el artículo 10.3 de la Directiva 2011/92/UE, en lo referente al deber de cooperación en el ámbito de la Unión Europea, así como a los fines previstos en el Convenio de 25 de octubre de 2007.

**De este modo, se hace imprescindible, a fin de garantizar la congruencia entre el Proyecto sometido a informe y la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015 de la que trae causa, modificar el artículo 2.2 del texto a fin de especificar con claridad y precisión las finalidades del fichero, que necesariamente habrán de exceder de la que en el presente momento aparece recogida como exclusiva en el texto sometido al parecer de esta Agencia, vinculándose con la prevención y**



**enjuiciamiento de los delitos a los que se refiere el Registro así como con la garantía de la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales de los Estados Miembros de la Unión Europea y de las que fueran parte en el Convenio del Consejo de Europa.**

De este modo, sólo en caso de que se especifiquen las finalidades descritas sería posible amparar el tratamiento de los datos a los que se refiere el artículo 4 del Proyecto, en que se incluyen, sin perjuicio de lo que inmediatamente se señalará, datos referidos a la comisión de infracciones penales y datos de salud, pues no otra consideración tiene la información del perfil del ADN conforme al artículo 5.1g) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, en la cobertura otorgada por la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015, el artículo 37 del Convenio del Consejo de Europa y el artículo 10 de la Directiva 2011/92/UE.

## VI

En cuanto a la estructura del Registro, la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015 dispone que el Registro “se formará, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

Asimismo, el artículo 37 del Convenio se refiere igualmente a los datos de identidad y perfil genético del condenado y el artículo 10 de la Directiva parece exigir el tratamiento del dato referido a la propia condición de condenado del afectado.

En este sentido, ya se ha indicado que esta Agencia puso de manifiesto que el tratamiento del dato referente al perfil genético del condenado debería encontrarse amparado en la correspondiente autorización del órgano jurisdiccional, por ser esta exigencia la establecida en el artículo 3.1 a) de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En este sentido, el artículo 4 del Proyecto prevé la previa autorización del órgano jurisdiccional para el tratamiento en el registro del dato identificador del perfil genético del condenado.

Junto con este dato, el Proyecto se refiere a “toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados”, y en todo caso los datos identificativos del expediente policial (número ordinal y atestado), la condición de menor de edad de la víctima, el delito cometido y la comisión del delito.



El artículo 3.1 del Real Decreto 95/2009 señala en su apartado a) que el Registro Central de Penados incluirá “la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal” y en su apartado e) que el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores incorporará “la inscripción de sentencias condenatorias firmes dictadas por los Juzgados y Tribunales en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores”.

A su vez, conforme al artículo 8 del propio Real Decreto, la información contenida en los Registros Centrales integrados en el Sistema deberá comprender, con carácter general, los siguientes datos:

*“a) Datos identificativos.*

*Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, número ordinal informático policial y número de atestado.*

*(...)*

*b) Órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de procedimiento, y número de identificación general.*

*c) Los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de género.*

*d) La condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.”*

En este sentido, si se tiene en cuenta que, al margen de los datos referidos al perfil genético del condenado, las restantes informaciones incluidas en el artículo 4 aparecen igualmente incorporadas al artículo 8 del Real Decreto 95/2009 que, no obstante, incluye también otros datos que exceden de los enumerados por el Proyecto ahora informado, sería conveniente clarificar si se pretende la inclusión en el Registro de todos los datos contenidos en el artículo 8 o si el mismo se limitaría a incluir los mencionados en el artículo 4 del Proyecto amén de los de identidad del condenado y la propia condena que le hubiera sido impuesta.

La cuestión no es baladí, por cuanto en caso de optarse por la inclusión de todos los datos contenidos en el artículo 8 del Real Decreto 95/2009 se



tratarían en el fichero, además de los datos del condenado los de la víctima del delito cuya comisión dio lugar a la condena firme.

Ello nos conduce nuevamente a la aplicación al caso del principio de proporcionalidad, de forma que el registro no debería incluir más datos que los necesarios para cumplir su finalidad. Y en este punto cabe recordar que el Registro, más allá de señalado por el artículo 2.2 del Proyecto, sirve esencialmente a los fines que se han descrito en el apartado anterior de este informe, por lo que debe valorarse si la inclusión de los datos identificativos de las víctimas resultan necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos.

En cuanto a la finalidad expresamente reconocida en el Proyecto, es lógico considerar que la identidad de la víctima en nada añade información que resulte necesaria para la emisión de las certificaciones a las que se refiere el artículo 9.

Por lo que respecta a la prevención y enjuiciamiento de delitos, debe tenerse en cuenta que la información del Registro no se refiere a causas objeto de investigación o enjuiciamiento, sino a condenas ya impuestas. Quiere ello decir que, en principio, la identificación de la víctima, máxime si se tiene en cuenta la regla de acceso total al Registro prevista en el artículo 7.1 del Proyecto, podría exceder de la finalidad perseguida, toda vez que el Registro pretende la identificación del delincuente sexual condenado para garantizar la adecuada perseguibilidad de otros delitos de esta naturaleza y que, además, en caso de resultar necesario, será posible, en el ámbito de una investigación concreta, la identificación particular de un víctima mediante el acceso al expediente policial o a los correspondientes autos judiciales.

De todo lo antedicho se desprende que, a juicio de esta Agencia, el registro podría contener, en cumplimiento de la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015, los datos referidos al perfil genético del condenado, previa autorización judicial, así como los incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 8 del real decreto 95/2009, pero no los previstos en la letra c) de dicho artículo, siendo así que los enumerados en el Proyecto se corresponden parcialmente con lo contenidos en el artículo 8 mencionado.

De este modo, a fin de garantizar la seguridad jurídica en el conocimiento del contenido del Registro, **sería preciso que el artículo 4 fuera modificado en el sentido de indicar que el Registro incorporará los datos a los que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 95/2009, a excepción de los identificativos de la víctima, así como el código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial.**



Tratando de continuar con el análisis del Proyecto desde la sistemática de la normativa de protección de datos, procede ahora hacer referencia a las cesiones de los datos contenidos en el mismo, a las que se refieren los artículos 7.1 y 9 del Proyecto sometido a informe.

A estos efectos debe traerse nuevamente a colación el principio de proporcionalidad al que nos hemos referido reiteradamente a lo largo de este informe. En este sentido, esta Agencia ha declarado en innumerables ocasiones que el citado principio opera en lo que a la cesión de datos se refiere en el sentido de que sólo podrán ser objeto de cesión los datos que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades legítimas que justifican dicha transmisión de datos. Dicho en otros términos, la cesión deberá encontrar su amparo en alguna de las causas legitimadoras establecidas en la normativa de protección de datos y limitarse a lo que sea necesario en el ámbito de dicha legitimación.

Como ya se ha dicho, de lo previsto en la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015 y del artículo 37 del Convenio de Lanzarote se desprende que será finalidad del Registro la de colaborar en la prevención y enjuiciamiento de los delitos a los que se refiere el propio Registro. De este modo, al amparo de la citada finalidad encontrarían amparo las transmisiones de datos a los órganos del Orden Jurisdiccional Penal y al Ministerio Fiscal, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando ejerzan funciones de policía judicial, siempre que en este caso la información sea necesaria para el desarrollo de las actuaciones que les sean encomendadas.

Mayo complejidad revisten los otros dos supuestos de cesión a los que se refiere el artículo 7.1. En efecto, se prevé en primer lugar en el inciso final del párrafo primero la cesión a los órganos judiciales del Orden civil que conozcan de los procedimientos de familia “a los efectos de su utilización en los procesos o actuaciones en los que intervengan. Igualmente se prevé en el párrafo tercero el acceso a los datos por las Administraciones públicas competentes en materia de protección a la infancia “para recabar los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social, aún sin consentimiento de los interesados”.

El último párrafo del artículo 7.1 se refiere al acceso a la información en toda la extensión que conste en el registro y es este último inciso el que hace generar dudas en cuanto a la aplicación de la norma. A tal efecto, ya se ha analizado anteriormente cuál es la extensión que por esta Agencia se considera adecuada a la finalidad propia del Registro, siendo así que la misma no incluye en ningún caso información sobre la víctima del delito cometido por quienes figuren en él.



Y es aquí donde se plantea la vinculación de la finalidad y extensión del Registro con los destinatarios a los que se acaba de hacer referencia, dado que del tenor de los dos supuestos mencionados parece desprenderse que la información recabada no se refiere tanto al delincuente sexual como la víctima del delito, siendo así que el tratamiento del dato de la víctima en aquél podría exceder de la finalidad que justifica la existencia del propio Registro, pudiendo perjudicar el derecho fundamental a la protección de datos de la propia víctima.

Ciertamente, las cesiones a las que se refiere el precepto podrían encontrarse amparadas por el artículo 22 quater de la Ley Orgánica 1/1996, en la redacción dada al mismo por la Ley 26/2015. Sin embargo ello no impide que se haga necesario precisar el alcance de la cesión, dado que podría afectar a la propia delimitación del contenido del Registro.

De este modo, si lo que se pretende realmente difiere de la identificación de la víctima, como sucedería en caso de que el acceso por los órganos jurisdiccionales civiles tuviese por objeto precisamente garantizar la integridad del menor en un proceso, evitando el contacto con el mismo de una persona de su entorno familiar que figurase en el Registro o si esa información resulta relevante para obtener precisamente ese objetivo por parte de las administraciones competentes en la protección del menor, **sería preciso que se clarificase con mucha mayor precisión lo dispuesto en el Proyecto para los dos supuestos mencionados.**

**De este modo, sería necesario clarificar que el acceso siempre se referiría, de forma exclusiva, a los datos del delincuente sexual cuya proximidad con el menor protegido pudiera colocar a éste en una situación de riesgo, amparando así la cesión en el principio de protección del interés superior del menor y evitando que pudiera considerarse amparado por la norma el acceso a datos de los propios menores, lo que implicaría la inclusión de tales datos en el Registro, a nuestro juicio completamente contraria al principio de proporcionalidad establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal.**

## VIII

Como ya se ha indicado, en lo que se refiere a la cesión de los datos del Registro, el artículo 9 se refiere a otro supuesto al que también es aplicable el régimen de la Ley Orgánica 15/1999 en materia de cesión, al establecerse los supuestos de transmisión de los datos en los términos establecidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 que, como se ha indicado anteriormente, establece que “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso



sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos”.

En cuanto al modo de acreditar esta circunstancia añade el precepto que “a tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.

Debe tenerse en cuenta que este último inciso viene a reproducir lo planteado por esta Agencia en su informe de 25 de julio de 2014, con la única salvedad de la opción por el legislador de la creación, a través de la disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015 de un registro específico.

En efecto, en el apartado X del citado informe, esta Agencia señalaba lo siguiente:

*“En cuanto a la creación del registro, debe tenerse en cuenta que el artículo 13.5 se refiere a la existencia de condenas por sentencia firme. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 2. 3 a) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia integra en el mencionado sistema al Registro Central de Penados, en el que se procederá a “la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal”. Es decir, la información referida a las condenas firmes ya se incorpora a un registro existente, lo que parece hacer innecesaria la creación de otro sistema de información distinto, quedando el tratamiento de los datos sometido además a las normas de este registro ya existente en cuanto a sus accesos y conservación de la información.*

*Sentado lo anterior, debería ahora valorarse cómo podría verificarse el cumplimiento por el interesado de la condición establecida en el artículo 13.5 propuesto; es decir, el procedimiento de acreditación de la inexistencia de los antecedentes penales. A tal efecto, ciertamente los artículos 5 y 6 del Real Decreto mencionado, referidos al acceso a los registros del sistema en general y al registro de penados en particular, no prevén los accesos a la información a los fines que se establecen en el artículo 13.5.*

*No obstante, el artículo 17.1 del Real Decreto establece claramente que “A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a su persona contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, de Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias No Firmes, de Protección de las Víctimas de Violencia*





*Doméstica, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y de Rebeldes Civiles y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas en los mismos”, existiendo diversos supuestos en las normas actualmente vigente que exigen la aportación de este tipo de certificaciones para la realización de determinados trámites o la obtención de autorizaciones, pudiendo incluso encontrarse ejemplos de la exigencia de este requisito en el ámbito laboral en relación con sectores específicos.*

*Pues bien, siendo posible que el legislador pueda exigir la aportación de una certificación negativa por el interesado para que proceda la autorización del mismo para la realización de actividades que impliquen un contacto habitual con niños o para la contratación del interesado para la realización de esas actividades, parece lógico que la medida que permite una mejor conciliación de la especial protección del interés superior del menor, consagrado por el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 con el derecho a la protección de datos de carácter personal sería la exigencia de esa certificación negativa del registro, referida específicamente a la comisión de los delitos mencionados por el artículo 13.5.*

*Para ello sería suficiente que el Anteproyecto clarificase que a los efectos establecidos en el precepto que ahora se está analizando, quienes pretendan llevar a cabo las actividades a las que se refiere el mismo deberán aportar un certificado del Registro Central de Penados que acredite la inexistencia de condenas por la comisión de los delitos mencionados. Para ello sería suficiente añadir un segundo párrafo al artículo 13.5 propuesto, en que se indicase que:*

*“A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de certificación negativa del Registro Central de Penados.”*

De lo que apuntaba el anterior informe de esta Agencia se desprende que el sistema que la misma plantaba se basaba en la aportación por el interesado del certificado negativo del Registro, teniendo en cuenta que la creación de un nuevo Registro lo residenciaría en éste y no en el de Penados.

Este modelo podría encajar con el establecido en el Proyecto sometido a informe, por cuanto cabría considerar que el mismo parte de un modelo en que, en principio, el interesado estaría obligado a la aportación del certificado, si bien en los supuestos en los que el destinatario fuese una Administración Pública, aquél se encontraría exonerado de su obligación en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cuyo artículo 6.1 b) reconoce a los interesados el derecho “a no aportar los datos y documentos que obren en



poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información”.

Sin embargo, el artículo citado se completa con la exigencia adicional de que “en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados”, añadiendo que “el citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos”.

El artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, al referirse a la exigencia a la que ahora estamos haciendo referencia dispone que “quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. Es decir, impone al interesado la obligación de acreditar la inexistencia de estos antecedentes, sin que se prevea un acceso directo por el empleador al mencionado Registro.

Ello afecta al apartado 1 del artículo 9 del Proyecto ahora informado, dado que al no existir una habilitación legal para el acceso directo al Registro, el acceso deberá producirse previo consentimiento del interesado.

El Proyecto prevé expresamente esta circunstancia. Sin embargo hace posteriormente referencia a la posible existencia de una habilitación legal. No obstante, como se ha indicado, la norma que impone la obligación de acreditar la inexistencia de antecedentes penales por los delitos a los que se refiere el Proyecto precisamente excluye esta habilitación, por lo que **procedería suprimir el inciso “salvo que una norma con rango de Ley lo exceptúe”, debiendo además indicarse que a falta de consentimiento el certificado se expedirá a instancia del propio interesado, en términos similares a los previstos en el apartado 2 del artículo 9.**

En relación con esta misma cuestión, **cabría plantearse si sería conveniente la inclusión en el Proyecto de alguna disposición que habilitase la delimitación por el Órgano que se considere competente, mediante la correspondiente habilitación normativa, de las profesiones y actividades que implican contacto con menores**, toda vez que resultará obligatorio para los Organismos Públicos o entidades privadas en que se desarrollen tales actividades recabar la certificación a la que se refiere el precepto. De este modo, se evitaría tanto situaciones en las que se recabe la información por considerar que el precepto ha de ser interpretado de forma extensiva (por ejemplo, actividades en las que aun existiendo contacto con menores existen barreras físicas que impiden la comisión de conductas que puedan perjudicar su interés superior) como aquéllas en que la interpretación



fuese excesivamente restrictiva, entendiéndose que no implican contacto con menores situaciones que sin embargo sitúan a éstos en situación de riesgo.

Por otra parte, el apartado 3 del artículo 9 del Proyecto se refiere a la cesión de los datos del registro “a instancias de autoridades judiciales o policiales extranjeras que lo requieran en el marco de una investigación judicial o policial, o de prevención del delito” sin mediar el consentimiento del interesado.

Dichas cesiones traerían causa de la finalidad del Registro relacionada con la cooperación policial y judicial en materia penal para la persecución de estos delitos prevista tanto en el Convenio de Lanzarote como en la Directiva 2011/92/UE, cuyo artículo 10.3 dispone que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, con vistas a la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la información relativa a la existencia de condenas penales por cualquiera de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales, sea transmitida con arreglo a los procedimientos establecidos en la Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros ( 2 ), cuando se solicite la información de conformidad con el artículo 6 de dicha Decisión marco con el consentimiento de la persona interesada”.

No obstante, a nuestro juicio, **esta previsión encajaría más dentro de los supuestos de cesión a los que se refiere el artículo 7, dado que no parece que en este caso se trate de la emisión de certificaciones, regulada por el artículo 9.**

## IX

Debe ahora hacerse referencia a la seguridad exigible al sistema. En este punto, el Proyecto no establece una previsión específica, limitándose a señalar el artículo 3 que “el encargado del Registro central de delincuentes sexuales, adscrito a la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, será responsable de su control, organización y gestión. Adoptará las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisión de la información regulada en el artículo siguiente, así como la integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en el Registro central”, así como que “el encargado del Registro central asumirá las funciones de anotación y verificación de la información telemática remitida, y garantizará, con plena eficacia jurídica, la autenticidad e integridad de los datos”.



Por su parte, el artículo 7.3 añade que “en todo caso, quedará constancia de la identidad de las personas que accedan al Registro central y de los datos consultados, correspondiendo al encargado del Registro la realización de auditorías periódicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades previstas en el presente Real Decreto”.

Ello exigiría que el Proyecto se remitiese al régimen establecido específicamente en materia de seguridad por el Real decreto 95/2009, cuyo artículo 14 establece lo siguiente:

*“1. Se implantarán en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.*

*De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.*

*2. Las redes de comunicación electrónica gestionadas por las comunidades autónomas que den soporte a los órganos judiciales estarán conectadas con el Sistema de Registros Centrales, en un entorno integrado en red, que garantice la confidencialidad y autenticidad de dichas comunicaciones.”*

Por este motivo, podrá optarse en el texto por o bien reproducir la totalidad del precepto reproducido, añadiendo a lo ya señalado lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 y el apartado 2 o bien remitir a la aplicación del artículo 14 del Real decreto 95/2009, siendo en todo caso preciso que se contenga en el texto alguna previsión en materia de seguridad además de la establecida en el artículo 7.3.

## X

Por último, debe hacerse referencia al ejercicio por los afectados de los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, cabiendo considerar que la obligación legal de inclusión de la información en el Registro excluye el ejercicio del derecho de oposición, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999.



En relación con este punto, el artículo 2.4 del Proyecto señala, como punto de partida, que “Los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como las medidas de seguridad de los datos contenidos en el Registro central de delincuentes sexuales se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y por sus disposiciones complementarias”.

A su vez, el artículo 8 regula el procedimiento de cancelación de los datos, que podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado, sometiéndose la cancelación de los datos a las normas que resulten de aplicación al Registro del que provengan los datos. A tal efecto, el Capítulo IV del Real Decreto 95/2009 establece un régimen específico para la rectificación y cancelación de las inscripciones registrales que, por aplicación del citado artículo 8.2 sería aplicable al registro de Delincuentes Sexuales regulado por el Proyecto. El Real Decreto además se refiere en sus artículos 19 y 24 a la cancelación de inscripciones en los Registros de los que procederá la información a incorporar en el regulado por el Proyecto. Así, conforme al artículo 19:

*“1. Las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán, de oficio o a instancia del titular de los datos, o por comunicación del órgano judicial, cuando habiéndose extinguido la responsabilidad penal, hubiesen transcurrido, sin delinquir de nuevo los plazos previstos y se hubiesen cumplido los restantes requisitos señalados en el artículo 136 del Código Penal.*

*2. Cuando el procedimiento se inicie de oficio o a instancia del interesado y no constara el informe del Juzgado o Tribunal en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 136 del Código Penal, el Registro de Penados remitirá el expediente en el plazo de quince días a fin de que informe preceptivamente en el plazo máximo de dos meses sobre la cancelación solicitada. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses.*

*3. La información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una sección especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales españoles.”*

A su vez, según el artículo 24:

*“Trascurridos diez años, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su plenitud o hayan prescrito, el Ministerio de Justicia procederá de oficio a la cancelación de cuantas inscripciones de sentencias referentes al mismo consten en el Registro.”*



A su vez, el artículo 18 del Real Decreto 95/2009 establece un procedimiento reglado para la rectificación y cancelación de dichos asientos, que difiere del establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.

El artículo 25.8 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas”.

Como se ha señalado, en el supuesto ahora analizado debe considerarse que si bien el derecho de acceso puede considerarse íntegramente regulado por las normas de protección de datos de carácter personal, la rectificación y cancelación de los datos se encuentra sometida a un procedimiento específico distinto del contemplado por aquellas normas.

Por este motivo **debería matizarse lo establecido en el artículo 2.4, dado que carece de congruencia invocar la aplicación de las normas de protección de datos cuando el procedimiento que habrá de tramitarse es el establecido en el Real Decreto 95/2009 en relación con la rectificación y cancelación de las inscripciones en el registro.**

En este sentido, y en aras a garantizar la seguridad jurídica y una adecuada interpretación de las normas contenidas en el Proyecto **sería igualmente aconsejable especificar el alcance en que serán de aplicación al Registro de Delincuentes Sexuales las normas reguladoras del Sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y en particular el Real Decreto 95/2009.**